

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	MEDIDA CAUTELAR
DEMANDANTE	BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEMANDADO	MARIO VÉLEZ MEJÍA
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE AUTO–
PROCEDENCIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 014 2019 00099 01 INTERNO 2023-0257
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 027
TEMAS	TUTELA CAUTELAR. EMBARGO CUENTA DONDE SE CONSIGNA PENSIÓN. DEBER DE DIRECCIÓN DEL PROCESO
DECISIÓN	REVOCA Y ORDENA USO DE PODERES DE DIRECCIÓN
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante frente al auto de fecha 6 de septiembre de 2023, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín, mediante el cual se levantó una cautela.

I. ANTECEDENTES

El Banco de Occidente S.A. presentó demanda ejecutiva en contra del señor Mario Vélez Mejía, pretendiendo el pago de la suma total de \$216.666.873,05, aportando como base de recaudo un título valor pagaré.

El juzgado de primera instancia libró mandamiento de pago el 22 de febrero de 2019, providencia notificada al demandado, quien no formuló excepciones, en cuya virtud se ordenó seguir adelante la ejecución en proveído del 7 de octubre de 2022.

Con la presentación de la demanda se solicitaron medidas cautelares, habiéndose decretado, en auto del 22 de febrero de 2019, embargo y

secuestro de los dineros que el demandado tuviere en cuentas de los bancos Davivienda, Bancolombia. Bogotá, Agrario y Caja Social y, luego, el 22 de febrero de 2023, el embargo y retención de los dineros que el demandado tuviere en las cuentas N° 79244 del Banco BBVA y N° 343548 del Banco Falabella.

En la etapa de ejecución, mediante apoderada judicial, el demandado solicitó en memorial del 3 de agosto de 2023 el levantamiento del embargo de la cuenta N° 079244 del Banco BBVA, alegando que se trata de una cuenta pensional, para cuyo efecto aportó certificación en tal sentido emitida por la entidad bancaria referida.

En providencia del 6 de septiembre de 2023 el juzgado de primera instancia ordenó el levantamiento del embargo de la cuenta de ahorros N° 372-79244 del Banco BBVA cuyo titular es el señor Mario Vélez Mejía, aduciendo que *“si bien, no se cumple con los requisitos establecidos en el artículo 597 del Código General del Proceso para petitionar dicho desembargo, considera el Despacho que al dejar embargada la cuenta arriba mencionada se estaría incurriendo en la vulneración del mínimo vital del señor Vélez Mejía”* (PDF 11 carpeta ejecución/carpeta medidas cautelares).

II. LA IMPUGNACIÓN

Frente al anterior proveído el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación señalando que no se ha solicitado ni decretado el embargo de la pensión del demandado, sino de un producto financiero vigente y el señor Vélez Mejía no ha probado la afectación a su mínimo vital (PDF 12 carpeta ejecución/carpeta medidas cautelares).

La reposición fue resulta desfavorablemente en auto del 17 de octubre de 2023, donde se concedió la alzada formulada de forma subsidiaria, correspondiendo entonces decidir de plano la apelación conforme lo establece el artículo 326 del C.G.P. (PDF 14 carpeta ejecución/carpeta medidas cautelares).

III. CONSIDERACIONES

1. LA TUTELA CAUTELAR.

Bien se sabe que las medidas cautelares están configuradas para asegurar el cabal cumplimiento de las decisiones que se adopten en un proceso jurisdiccional, principalmente, en la providencia que resuelva las pretensiones de un juicio. El concepto doctrinario más autorizado en materia procesal enseña que la finalidad de las cautelas es la de evitar *“aquellas alteraciones en el equilibrio inicial de las partes que pueden derivar de la duración del proceso”*¹.

La Corte Constitucional también ha tenido la oportunidad de referirse a las medidas cautelares; así en la Sentencia T 379 de 2004, expresó:

(...) son instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.

El régimen de las medidas cautelares es taxativo y de interpretación restringida, en aras de limitar la afectación de los bienes de las personas demandadas en un juicio. La afectación de limitar el dominio de las personas respecto de sus bienes, es facultad exclusiva del legislador, mediante normas procesales que son de orden público, y por tanto no son disponibles ni por las partes, ni mucho menos por el Juez. Dicha idea ha sido recogida por valiosa doctrina, así: *“Tampoco se ha dejado librada su procedencia y oportunidad al criterio del Juez, sino que se las ha autorizado expresamente en cada caso, de donde resulta que por su carácter excepcional las disposiciones que a ellas se refieren son de interpretación restrictiva”*².

¹ CARNELUTTI, Franceso. *Derecho y proceso*. Buenos Aires, E.J.E.A., 1971, pág. 415

² CHIOVENDA, Giuseppe. *Principios de derecho procesal civil*, traducción de la 3 edición, pagina 279.

Como características de la medida cautelar es adecuado indicar que consiste generalmente en un acto jurisdiccional, ya que por medio de esta se cumple una de las funciones del juez, que es asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales. También se caracterizan las medidas por ser instrumentales o accesorias, ya que si se miran individualmente no tienen sentido o efecto práctico. La provisionalidad como característica es corolario de la anterior, ya que solo persisten mientras esté en curso el proceso y después de éste en casos especiales.

2. CASO CONCRETO.

La providencia que motiva este segundo grado de conocimiento es el auto mediante el cual se levantó el embargo de la cuenta de ahorros N° 372-79244 del Banco BBVA que figura a nombre del demandado Mario Vélez Mejía, con sustento en tratarse de una cuenta pensional.

No se discute en el presente caso el carácter inembargable que legal³ y jurisprudencialmente⁴ se le ha dado a las pensiones, con contadas excepciones que no aplican en el *sub judice*, inembargabilidad que está fundada en el entendido que dicha prestación social está encaminada a solventar el mínimo vital de la persona que luego de muchos años de trabajo obtiene ese beneficio que le permite un retiro digno.

La cuestión en este caso se circunscribe a determinar si una cuenta destinada a la consignación de la pensión es o no inembargable, tema específico sobre el que no existe norma precisa como tampoco se conoce pronunciamiento jurisprudencial.

³ Artículo 134 Ley 100 de 1993 “5. Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta Ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia”.

Artículo 594 C.G.P. “BIENES INEMBARGABLES (...) 6. Los salarios y las prestaciones sociales en la proporción prevista en las leyes respectivas. La inembargabilidad no se extiende a los salarios y prestaciones legalmente enajenados”

⁴ Sentencia T 557 de 2015 “3.1. En la Corporación ha sido reiterada la jurisprudencia que ha sostenido la inembargabilidad de las pensiones en cualquiera de sus formas, precisando que constituyen prestaciones laborales básicas con jerarquía constitucional (artículo 53 CP). En relación con la pensión de vejez, diferentes salas de revisión han sostenido que tienen como fin primordial garantizar al trabajador, una vez transcurrido un cierto lapso en la prestación de los servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, el acceso a unos ingresos sistemáticos y regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su núcleo familiar, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en que consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez”

Considera la suscrita Magistrada que las particularidades en asuntos como el presente donde, como el mismo juez de primera instancia lo reconoce, no se ajustan plenamente a la norma y donde el embargo no está decretado sobre la pensión del demandado sino sobre una cuenta bancaria respecto de la cual el banco no informó alguna situación de inembargabilidad, implican que el juez que conoce el asunto actúe de forma diligente y proactiva, para no desconocer los derechos fundamentales del demandado pero tampoco los de la acreedora demandante y, en uso de las facultades que como director del proceso tiene, antes de proceder al desembargo de forma llana, indague y determine si dicha cuenta tiene o no otro uso diferente a la consignación de la pensión, esto es, si allí definitivamente no se pueden realizar otros pagos o consignaciones diferentes en favor del titular de la misma, caso en el cual procedería el levantamiento o si es posible otros usos y consignaciones, lo que conllevaría a estudiar una eventual adecuación de la cautela de cara a mantenerla únicamente respecto de dineros que no sean consignados por el pagador de la pensión, conducta que resultaba más necesaria en este caso si, como se anteló, se tiene en cuenta que el banco tomó nota de la medida cautelar sin ninguna advertencia sobre el uso exclusivo para la consignación de la pensión, averiguación que debe ser realizada de forma prioritaria y diligente dado los derechos discutidos.

Ahora, lo anterior no implica que le asista razón al recurrente al señalar que para el desembargo es necesario que el afectado alegue o demuestre afectación al mínimo vital, pues aunque la Corte Constitucional ha establecido la vulneración de dicho derecho cuando se realizan embargos indebidos de pensiones, se trata de un presupuesto necesario para la procedencia del amparo en sede de acción de tutela, pero que no está establecido en las normas que regulan la inembargabilidad de la pensión, siendo lo cierto, como se anteló, que en este caso lo que faltó fue una adecuada auscultación por parte del juez de primera instancia de cara a determinar si la cautela debía ser indefectiblemente levantada o si podía mantenerse su decreto condicionado, siendo ésta razón la que llevará a la revocatoria del auto recurrido, con la advertencia de que no se mantiene el decreto de la cautela de forma indefectible, sino que, previo al levantamiento, debe el juez realizar las indagaciones del caso, como se

explicó, que le permitan decidir con sustento suficiente si es adecuado mantener o no la medida e incluso adecuarla.

3. COLOFÓN Y COSTAS.

Como el presente asunto requería que previo al levantamiento de la cautela, el juez, en uso de sus facultades de dirección del proceso indagara sobre la necesidad indefectible de levantarla o la posibilidad de adecuarla, se revocará la providencia de primera instancia disponiendo que, **antes de levantar la medida cautelar de embargo que pesa sobre la cuenta de ahorros N° 372-79244 del Banco BBVA** que figura a nombre del demandado Mario Vélez, **debe el juez de primera instancia indagar con el Banco BBVA si dicha cuenta tiene o no otro uso diferente a la consignación de la pensión, esto es, si allí definitivamente no se pueden realizar otros pagos o consignaciones diferentes a dicha prestación y en favor del titular de la misma, caso en el cual procedería el levantamiento o si es posible otros usos y consignaciones, esto, para analizar la posibilidad de adecuación de la cautela de cara a mantenerla únicamente respecto de dineros que no sean consignados por el pagador de la pensión.**

Sin condena en costas por la prosperidad del recurso y porque no se evidencian causadas.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el auto de fecha 6 de septiembre de 2023, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Medellín.

SEGUNDO. DISPONER que, antes del levantamiento de la cautela, **de forma prioritaria y diligente,** el juez de primera instancia indague con el Banco BBVA si la cuenta N° 372-79244, cuyo titular es el demandado, tiene o no otro uso diferente a la consignación de la pensión, esto es, si

allí definitivamente no se pueden realizar otros pagos o consignaciones diferentes a dicha prestación y en favor del titular de la misma, caso en el cual procedería el levantamiento o si es posible otros usos y consignaciones, esto, para que analice la posibilidad de adecuación de la cautela de cara a mantenerla únicamente respecto de dineros que no sean consignados por el pagador de la pensión.

SEGUNDO. NO IMPONER condena en costas por las resultas favorables del recurso y porque no se evidencian causadas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

(Firma electrónica de conformidad con el artículo 105 del C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2c4536c7df5393f82815d3adb984e68f4228798f2d9e2d86cd313653f8a8eee0**

Documento generado en 12/03/2024 11:21:39 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>